



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0160 - 2015-GRA/GG-ORADM

Ayacucho, 24 DIC 2015

VISTO:

Visto el Decreto 15036, Resolución N° 16 (sentencia), recaído en el Expediente N° 29-2012, emitida por el Juzgado Civil Transitorio de Ayacucho; Sentencia de Vista (Resolución N° 22) del Expediente N° 29-2012, emitido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; Informe N° 61-2015-GRA/GG-ORADM-CECCPPEA; Opinión Legal N° 691-2015-GRA-AYAC/ORAJ; Informe N° 341-2015-GRA/ORADM-ORH-UARBP e Informe N° 04-2014-GRA-GG-ORADM/RAAV;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, del Capítulo XIV y Título IV de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización, y el artículo 2° de la Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales corresponden a un nivel de gobierno por la naturaleza descentralizada del Estado Peruano, por lo mismo son personas jurídicas de derecho público y con prerrogativas de autonomía política, económica y administrativa, dentro del marco de las facultades conferidas, por lo que para la administración económica y financiera está constituido en pliego presupuestal;

Que, con fecha 11 de febrero de 2015, Aníbal Quispe Paredes, Asención Quispe Toledo, Teófilo Julio Quispe Jáuregui, Lázaro Lidio Mendoza Bendezú, Nelly Gloria Jara Falcón, Leandro Huamán Cule, Salvador Agripino Huamaní Mendoza, Saturnino Alejandro Flores Jáuregui, Santos Inocencio Cárdenas Guevara, Félicta Olinda Aparcana Bravo, Renán Melchor Añanca Huaytalla, Edelmira Aguilar Vega, Anibal Quispe Paredes y Renson Michel Sayre Mochcco, solicitan pago de devengados de los incentivos laborales de conformidad con la Resolución Ejecutiva Regional 680-2006-GRA/PRES; con fecha 15 de setiembre de 2013, en el Expediente N° 29-2012, el Juzgado Civil Transitorio de Huamanga, ha emitido Sentencia, en primera instancia, declarando fundada la demanda contenciosa administrativa, sobre cumplimiento de pago de incentivos laborales de acuerdo a la Resolución N° 680-2006-GRA/PRES de fecha 06 de diciembre de 2016, a favor de los servidores arriba mencionados; posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2014, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, ha confirmado la sentencia de primera instancia, en todos sus extremos, a favor de los servidores antes mencionados, la misma que ha quedado consentida, consecuentemente se encuentra en ejecución; con fecha 11/06/2015 se ha emitido el Informe N° 341-2015-GRA/ORADM-ORH-UARBP, mediante el cual se da cuenta que el monto de los devengados para cumplimiento de sentencia judicial, a favor de los trece (13) servidores de la Sub Región Puquio asciende a la suma de S/. 246,187.00, por el periodo comprendido desde enero 2006 a diciembre de 2014. Con fecha 14/10/2015 se ha emitido la Opinión Legal N° 691-2015-GRA-AYAC/ORAJ, se ha recomendado que se viabilice el pago a favor de los servidores antes mencionados, ya que la sentencia tiene la calidad cosa juzgada; con fecha 26 de octubre de 2015, se ha emitido el Informe Técnico N° 061-2015-GRA/GG-ORADM-CECCPPEA, mediante el cual se ha recomendado se proceda a emitir la Resolución correspondiente sobre reconocimiento de compromiso de pago devengado por incentivos laborales, a favor de los servidores arriba mencionados;

Que, de conformidad a la Ley N° 30137, Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2014-JUS, establecen que las deudas por sentencia judicial deberán clasificarse de acuerdo a los criterios de priorización, quedando divididas en cinco (05) grupos: Grupo 1: materia laboral, Grupo 2: material previsional, Grupo 3: víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, Grupo 4: otras deudas de carácter social; y, Grupo 5: deudas no comprendidas en los anteriores grupos. Para tal propósito deberá realizarse el listado por grupos, cuyo orden estará determinado por la fecha de notificación de la obligación, iniciando por la más antigua, tomando en cuenta la fecha de notificación del requerimiento de pago y en el caso de sentencias supranacionales,





la fecha de notificación de la sentencia al Estado. En caso de empate entre dos o más obligaciones, se deberá priorizar a los acreedores o beneficiarios de mayor edad y si a pesar de ello dos o más obligaciones mantuvieran la misma posición, se deberá priorizar a la de menor monto. Asimismo, cada Pliego contará con un Comité de carácter permanente para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada; sin embargo, el financiamiento para el pago de obligaciones derivadas de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la entidad, aprobado para el año fiscal correspondiente, en caso de no ser suficiente la acción del numeral anterior, el financiamiento se efectúa con cargo a los recursos que resulten de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que la entidad encuentre necesario realizar, en caso de no ser suficiente la acción del numeral anterior, el financiamiento se efectúa con cargo a los recursos que resulten de la aplicación del artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF;

Que, la Novena Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala lo siguiente: "Los Incentivos Laborales que se otorgan a través del CAFAE se sujetan a lo siguiente: los trabajadores administrativos bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 que tienen vínculo laboral vigente con el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y que no perciben ningún tipo de Asignación Especial por la labor efectuada, Bono de Productividad u otras asignaciones de similar naturaleza, con excepción de los Convenios por Administración por Resultados. En ningún caso, se podrán otorgar Incentivos laborales al personal bajo el régimen laboral de la actividad privada, al personal contratado para proyectos de inversión a los consultores, profesionales o técnicos contratados, a nivel de todos los pliegos. En ese sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que sólo se podrán efectuar transferencias de fondos públicos al CAFAE los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales cuyo personal se regula bajo el Régimen Laboral Público - Decreto Legislativo N° 276, y que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley en mención realizan transferencias al CAFAE para el otorgamiento de incentivos laborales, conforme a la normatividad vigente;

Que, los requisitos que debe reunir el servidor público para tener derecho a los incentivos y/o asistencias económicas del CAFAE son las siguientes: a) Debe estar sujeto al régimen laboral de la actividad pública, regulado por el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. b) Debe ocupar una plaza en la entidad, sea en calidad de nombrado, encargado, destacado o cualquier otra modalidad de desplazamiento que implique el desempeño de funciones superiores a los treinta (30) días calendarios, con prescindencia de su cargo, nivel o categoría;

Que, de autos se advierte que la Resolución Ejecutiva Regional N° 1383-2006-GRA/PRES no hace distinción para el pago de incentivos laborales entre los servidores de las direcciones regionales sectoriales con los servidores de las oficinas Sub Regionales, por lo que, en concordancia de la igualdad ante la Ley, sería de aplicación para todos los servidores del ámbito del Gobierno Regional de Ayacucho; en tal sentido, la Resolución Ejecutiva Regional N° 680-2006-GRA/PRES sería de aplicación para la percepción de los incentivos laborales de acuerdo a la escala fijada en dicha resolución. En tal sentido, habiéndose emitido sentencia en primera instancia, así como sentencia de vista que confirmó la del A-quo, las mismas que fueron consentidas, consecuentemente tiene la calidad de cosa juzgada y deben de ser acatadas por las autoridades administrativas, ya que es las reglas del Estado de derecho; siendo así, es insoslayable su ejecución, más aun teniendo en cuenta la Opinión Legal mencionada y las resoluciones judiciales con cosa juzgada;

Que, el artículo 37 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, prescribe que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del período inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el primer trimestre del año fiscal siguiente, con cargo a la disponibilidad financiera existente correspondiente a la fuente de financiamiento a la que fueron afectados. Con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que se cierra en esa fecha. En tal sentido, de conformidad al 4° de la Ley 30281, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2015, se ha establecido que todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que





autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. La acción de cobro de los créditos a cargo del Estado, cualquiera sea el acreedor, prescribe a los quince años, en consecuencia, se hace insoslayables el reconocimiento de la deuda vía crédito devengados, a favor de los servidores antes mencionados;

Que, el artículo 8° del Decreto Supremo N° 017-084-PCM, Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado precisa que las resoluciones serán expedidas en primera instancia por el director General de Administración o por quien haga las veces;

Que, estando a los fundamentos expuestos, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias mediante Leyes N°s 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981 y la Ley N° 30305, Ley de Reforma de los artículos 191, 194, 203 de la Constitución Política del Estado el cual modificó la denominación de "Presidente Regional" a Gobernador Regional y de "Vice Presidente Regional" a Vice Gobernador Regional, así como en concordancia con la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 539-2015-GR/PRES de 24 de junio de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y OTORGAR, las obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior, vía crédito devengado, reconocidas mediante sentencia judicial con calidad de cosa juzgada, a favor de los siguientes servidores:

Beneficiarios	Cargo	Nivel	Deuda por pagar
1.- Aníbal Quispe Paredes	Ingeniero II		
2.- Asunción Quispe Toledo	Superv.Progr. Sect. I	D-3	S/. 21,600.00
3.- Teófilo Julio Quispe Jáuregui	Chofer III	T-4	S/. 21,600.00
4.- Lázaro Lidio Mendoza Bendezú	Ingeniero II	P-4	S/. 21,600.00
5.- Nelly Gloria Jara Falcón	Secretaria II	T-2	S/. 21,600.00
6.- Leandro Huamaní Cule	Ingeniero III	P-5	S/. 21,600.00
7.- Salvador Agripino Huamaní Mendoza	Asistente Serv. Infraestr. II	P-2	S/. 21,600.00
8.- Saturnino Alejandro Flores Jáuregui	Asistente Serv. Infraestr. II	P-2	S/. 21,600.00
9.- Santos Inocencio Cárdenas Guevara	Espec. Administrativo III	P-5	S/. 21,600.00
10.- Felicita Olinda Aparcana Bravo	Economista II	P-4	S/. 21,600.00
11.- Renán Melchor Añanca Huaytalla	Espec. Administrativo II	P-4	S/. 17,400.00
12.- Edelmira Aguilar Vega	Secretaria V	T-5	S/. 17,586.67
13.- Renson Michel Sayre Mochcco	Técnico Administrativo III	T-5	S/. 21,600.00
TOTAL			S/. 272,586.67

Dispuestos mediante sentencia recaído en el Expediente N° 29-2012 del Juzgado Civil Transitorio de Ayacucho y confirmada con Sentencia de Vista, emitido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

ARTÍCULO SEGUNDO: La afectación presupuestal corresponde a los Recursos Ordinarios (pago sentencias judiciales), Especifica: 2.5.5.1.1 Personal Administrativo. Transcribir la presente Resolución a las instancias pertinentes, con las formalidades que exige la Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ORADM/raav



GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Lic. Adm. ABRAHAM VALCOURI ROMANI
Director Regional de Administración

